

EL SURGIMIENTO DE LAS FERIAS DE SAN TELMO. UN FENÓMENO ATADO A LA COYUNTURA NACIONAL

The emergence of San Telmo's fairs.
A phenomenon tied to the national conjuncture

AUTORA

Andrea Gómez | Facultad de Periodismo y Comunicación Social
andreaagomezperio@gmail.com | Universidad Nacional de La Plata
República Argentina

Resumen

Palabras clave

cultura
público
hegemonías
narrativas mediáticas

En este artículo, se presenta el análisis en torno al tratamiento mediático de la creación de la Casa Central de la Cultura Popular en la Villa 21 Barracas. Al mismo tiempo, se analiza de qué modo el «traslado» de la sede de la entonces Secretaría de Cultura de la Nación y su posterior jerarquización como Ministerio. En este marco, también se reflexiona acerca de la posición que asumen los medios de comunicación en la construcción de hegemonías y los modos en que entendemos la cultura y lo público.

Abstract

Keywords

culture
public
hegemoni
media narratives

In this article, one presents the analysis concerning the media treatment of the creation of the Headquarters of the Popular Culture in the Villa 21 Barracas. At the same time, it is analyzed of what way the «movement» of the headquarters of the Secretariat at the time of Culture of the Nation and his later hierarchical organization like Department. In this frame, also it is thought over brings over of the position that the mass media assume in the construction of hegemonías and the manners in which we understand the culture and the public thing.



Esta obra está bajo
una Licencia Creative
Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar
4.0 Internacional.

EL SURGIMIENTO DE LAS FERIAS DE SAN TELMO. UN FENÓMENO ATADO A LA COYUNTURA NACIONAL

Por Andrea Gómez

El espacio público de San Telmo es escenario de prácticas sociales de construcción de sentidos vinculados a la ciudadanía nacional, por sus caracteres porteños o argentinos, pero también en relación a la apropiación de la calle que hacen los feriantes y en particular, el sector de los revendedores, llamados manteros, como uno de los grupos combatidos en los últimos años, a través de su desplazamiento, reubicación o reconversión de su actividad desde el Gobierno de la Ciudad.

Pero las problemáticas por el uso del espacio público son hechos que pueden rastrearse a fines de la década del 60, durante la dictadura militar, bajo la intendencia de Manuel Iricibar. El desplazamiento de las clases populares comenzó con proyectos de urbanización que incluyeron desalojos y demoliciones, luego continuó con el conflicto por la reventa y los vaivenes de la economía mundial, que modificó el valor de las propiedades y el perfil del barrio. Cambiaron entonces los sentidos sociales en torno al uso del espacio público.

Para el abordaje de esta temática, que se realizó en el marco del trabajo de tesis de Licenciatura en Comunicación Social, de la Carrera en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, se realizó un mapeo de los cambios ocurridos en torno a las políticas sobre el espacio público, el surgimiento de los diferentes sectores feriales del barrio de San Telmo y su relación con la coyuntura nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

En principio, el primer sector ferial de San Telmo, ubicado en la Plaza Dorrego y la calle Humberto Primo, nació en noviembre de 1970, por iniciativa del director del Museo de la

Ciudad -ex Arquitectónico-, José María Peña. Su razón de ser fue ante todo la preservación de la cultura ciudadana, aunque los aspirantes a feriantes se acercaron con el objetivo de vender los artículos viejos que tenían en sus casas, a través de una convocatoria publicada en diversos periódicos que decía: «Feria de San Pedro González Telmo. Venda sus cosas viejas. 8 y 15 de Noviembre. Informes Museo Arquitectónico» (Archivo de la Biblioteca del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, 1970).

En ese entonces, el país se encontraba bajo el gobierno de facto de Alejandro Lanusse. La economía estaba caracterizada por la inflación, la fuga de divisas, la caída del salario y el desempleo. Desde 1930 hasta el golpe de Estado de 1976, la economía nacional se había basado en una industrialización sustitutiva de importaciones con algunas dificultades hacia el final del periodo. Tal es así que de los inicios de los años 70 se recuerdan medidas contra la disparada del déficit como una reforma impositiva, aumentos salariales por decreto y una singular veda de carne vacuna, que regía sobre hoteles y restaurantes, y que se extendió a los consumidores semana de por medio.

En el plano político surgieron los rumores de una posible salida democrática y el retorno del general Juan Domingo Perón; se levantó la veda política y se reintegraron los bienes a los partidos políticos. Mientras tanto ocurría la masacre de Trelew. Las fuerzas de las FAR, ERP y Montoneros planearon la fuga de los prisioneros de Rawson. Sus jefes lograron escapar y se dirigieron a Cuba, pasando por Chile. El resto se entregó a la Marina, pero esta simuló un intento de fuga y ordenó su fusilamiento. Finalmente, el 11 de marzo de 1973, ganó las elecciones presidenciales Héctor Cámpora.

En ese tiempo el intendente de la ciudad de Buenos Aires era el general Manuel Iricibar, cuestionado por sus planes de urbanización. Este proceso comenzó en 1968 pero se basaba en proyectos ya impulsados en 1911 y 1926, que consistían en la ampliación de la avenida 9 de Julio y otras arterias para agilizar el tránsito que ingresaba en la ciudad. Esto respondía a un modelo de urbanización centralizadora que implicaba la demolición de zonas históricas, y que incluía parte de Monserrat y San Telmo. Los años transcurrieron debido a la falta de presupuesto, hecho que permitió la preservación del patrimonio histórico y que las clases populares no sufrieran los desalojos correspondientes (*Revista Primera Plana*, 1968).

Es entonces que, durante este *impasse*, el arquitecto Peña le solicita a la intendencia su aval para la realización de la Feria de antigüedades de Plaza Dorrego y la Feria de las artes, las cuales quedarían bajo la órbita del museo y el ministerio de Cultura. Esta forma de política del espacio público, sin tener en cuenta a los ciudadanos y en especial a las clases populares, fue común a partir del golpe de 1976.

Callados los debates sobre urbanización que habían puesto en juego la formación de la ciudadanía, fundamentalmente hasta la década del 30, y finalizado el Estado de Bienestar que propició contextos para una socialización más igualitaria, la llegada del neoliberalismo fue momento de clausura de cualquier discusión sobre la ciudadanía y sobre el espacio público como un lugar de creación colectiva (Appugliese, 2008:1)

En ese mismo sentido, Appugliese sostiene que la última dictadura violó los derechos humanos y ejerció igual política en materia de urbanismo:

«barrió de la ciudad a todos los que no formaban parte de su modelo de “sociedad blanca”, destruyó las villas miseria y echó a sus habitantes fuera de los límites de la capital». Paralelamente, se realizaba una «limpieza de asentamientos pobres; la dictadura endeudó al país con créditos extranjeros para construir la serie de autopistas que cortaron una ciudad que ya empezaba a dividirse aún más entre ricos y pobres» (Appugliese, 2008:1)

En este marco, la inversión privada tuvo un mayor margen de maniobra. A mediados de los años 90 ya se advirtieron nuevas características en el barrio, aunque no de manera tan notoria como a partir de 2002. Así es que la segunda feria de San Telmo nació recién 32 años después. Su contexto de aparición fue muy distinto. Durante las décadas anteriores, los gobiernos militares que se sucedieron impulsaron un modelo económico neoliberal, caracterizado por la desregulación financiera, la privatización de las empresas públicas, la liberación de las importaciones y el equilibrio fiscal. Estas medidas estaban direccionadas por los organismos de crédito internacionales. En concordancia, el Estado fue reducido a su mínima expresión. Los índices de desempleo y subempleo subieron de forma alarmante, lo que generó un gran aumento de la pobreza y la indigencia. La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores no quedaron fuera de este fenómeno.

A su vez, los gobiernos de facto habían desarticulado la trama organizacional que tenían las bases populares en sus años

precedentes. Fue luego de la crisis que experimentó el modelo, en el año 2001, cuando la gente se unió de nuevo impulsada por la necesidad y el descreimiento en la vieja política.

En lo sucesivo, con el regreso a la democracia, la economía continuó por la senda del neoliberalismo, durante los gobiernos del radical Raúl Alfonsín; Carlos Menem, del Partido Justicialista y Fernando De la Rúa. Este último gobierno estuvo conformado por la coalición entre el radicalismo y el Frente para un País Solidario (FREPASO), que constituyó la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. Las diferencias hacia el interior de la conducción se hicieron evidentes con la sanción de la Ley de Reforma Laboral, luego de que se conoció la existencia de sobornos para su aprobación. La credibilidad del gobierno se vio afectada por este hecho, lo que produjo la renuncia del jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno y del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. La economía estaba en crisis y los ministros de Economía se sucedieron hasta la llegada de Domingo Cavallo, quien ya había sido ministro de Menem, al cual se le otorgaron poderes especiales.

Es entonces cuando en 2001 las elecciones favorecieron al Justicialismo, que obtuvo la mayoría en ambas cámaras. En diciembre, para evitar la quiebra bancaria y la fuga de capitales, se impuso como medida un tope para los ahorristas, que podrían retirar de sus cuentas un máximo de 250 pesos cada semana por 90 días. Esto generó el descontento de la clase media, que se sumó al de las clases populares sumidas en la miseria. También se agregó a estos hechos la presión de los sindicatos que convocaron a huelgas generales.

El 19 de diciembre, los reiterados saqueos hicieron que De la Rúa decretara estado de sitio e intentara conformar un gobierno de unidad nacional, objetivo que no consiguió. Su renuncia se produjo en medio de un escándalo por la orden de represión a las manifestaciones populares y un saldo de 36 muertos y cientos de heridos en todo el país. A partir de estos hechos la gente empieza a interesarse en los asuntos de orden público y recupera el territorio que había ganado cuando los sectores populares mostraron una fuerte organización social. Algunos movimientos, como las asambleas barriales, tienen a su cargo múltiples emprendimientos en su zona de influencia, que se transformaron en verdaderos polos de nuevas economías y formas de hacer política. Un caso es el de la Asamblea 20 de diciembre de San Telmo, que se encuentra incluida dentro de Asambleas del Pueblo, vinculada al Movimiento de Acción Socialista (MAS).

En ese momento era jefe del gobierno porteño Aníbal Ibarra, de la Alianza, quien a su vez fue reelecto en 2003, en la fórmula de Fuerza Porteña, y ejerció su cargo hasta que fue destituido luego del incendio ocurrido en el boliche República de Cromañón. Su jefatura es considerada como bastante eficiente por analistas actuales, sobre todo si se tienen en cuenta el equilibrio fiscal, las obras de construcción y ampliación de la red de subterráneos, y si se compara a la gestión con la de Mauricio Macri. No obstante, se registró un aumento de la delincuencia, junto a las constantes manifestaciones públicas y falta de gestión ante las frecuentes inundaciones, entre otros hechos. Un aspecto fue la emergencia habitacional: muchos ciudadanos residían en villas, casas tomadas y hoteles o pensiones alquilados por el Estado, en este último caso una modalidad sobre la que Defensoría del Pueblo había denunciado el pago de sobrepagos a los propietarios.

En ese contexto, la urbanización volvió a ser una de las preocupaciones del Gobierno de la Ciudad. Un proyecto fue la creación de la Corporación Sur, un ente estatal descentralizado, con el objetivo de desarrollar la zona sur, la cual comprende a los barrios de Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Riachuelo, Flores, Villa Soldati, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya, Boedo, Parque Patricios, Barracas, Constitución, San Telmo y La boca. En este marco se creó el programa Buenos Aires desde el Sur con ocho ejes de trabajo: desarrollo económico, calidad ambiental, infraestructura, cultura, salud, educación, derechos sociales y vivienda.

A partir de la crisis de 2001, el peso devaluado atrajo una mayor cantidad de turismo extranjero. Las inversiones en esta rama condujeron a la ilusión de generar divisas más un freno al desempleo. Por lo cual, en el contexto de Buenos Aires desde el Sur se impulsa el desarrollo de la zona del casco histórico de cara al visitante. Esto incluía el eje San Telmo y Monserrat. Con la creación del Gobierno Autónomo de la Ciudad, el programa encargado del desarrollo de la zona fundacional, Plan de Manejo del Casco Histórico, estaría en manos de la Secretaría de Planeamiento Urbano bajo el nombre Programa San Telmo-Montserrat, transferido en 2000 a la Secretaría de Cultura, bajo la Dirección General Casco Histórico, dependiente en ese momento de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y luego del Ministerio de Cultura (Appugliese, 2008).

Así es como esta zona antes amenazada por las demoliciones es revalorizada como patrimonio histórico y atractivo turístico, pero dejando excluidos de todas formas a los sectores populares, debido al aumento del valor de las propiedades. La diferencia más importante con el resto de los barrios del sur, es que San Telmo y Monserrat forman parte del casco fundacional, por lo que se apeló a su carácter ciudadano, la actividad de la feria de antigüedades de Plaza Dorrego y la particularidad que le daban a sus calles los locales de los anticuarios. Pero en contraposición, los revendedores o manteos de la calle Defensa serían combatidos. El perfil del barrio cambió entonces junto a los emprendimientos privados que se sumaron, como hoteles, hostels, restaurantes, bistrós y marcas de categoría.

Al momento de realizar el Plan de Manejo, en el año 2000, las características del barrio de San Telmo eran aún muy diferentes de las que se presentan en la actualidad. En su momento se realizó un diagnóstico que encontraba como problemas fundamentales de la zona el abandono del lugar por el traslado de actividades y residentes hacia otros sectores de la ciudad, las deficientes condiciones de habitabilidad propias de barrios antiguos y el criterio de oportunismo y falta de plan que primaba en las edificaciones. (Appugliese, 2008:4).

Paralelamente a ese aspecto, Appugliese sostiene que como contrapartida, se observaban en la zona puntos fuertes para aprovechar y potenciar como los anticuarios que reforzarían el potencial cultural y turístico de la zona.

Pero a raíz de estos emprendimientos los precios inmobiliarios subieron, lo que afectó a las clases populares. Si bien existió un programa de consolidación residencial que preveía una línea de préstamos hipotecarios del Banco Ciudad para promover la radicación y mejora de sus condiciones, lo único que prosperó fue un plan de asesoramiento gratis, que se trataba de estudios técnicos realizados por profesionales de la Dirección General de Casco Histórico sobre infraestructura y edificación, presentados como informes a pedido de propietarios.

El plan no pudo consolidar la política de créditos, y los sectores medios y bajos sufrieron el alza en el valor de los inmuebles y los servicios. Algunos propietarios no renovaron los contratos y convirtieron las viviendas en hostels o galerías de arte. También muchos espacios ligados a organizaciones

populares tuvieron que trasladarse a otras zonas. Otros lograron permanecer.

Los desalojos como política de gobierno fueron en aumento al tiempo que se colocaron en la mirilla del sector privado tras el sostenido aumento del valor de los inmuebles en la zona. Casas de pensión, conventillos, y también asentamientos precarios, en las esquinas de Bolívar e Independencia o Independencia y Perú o el ex PADELAI, no quedaron al margen y sus desalojos colaboraron al éxodo de sectores que vivían tradicionalmente en el barrio (Appugliese, 2008:5).

A su vez llegaron a la zona otros actores con mayor poder adquisitivo; personas de entre 30 y 40 años, entre ellos estudiantes de cine, artistas, diseñadores y publicistas. Algunos eran turistas extranjeros que podían permanecer por temporadas prolongadas en la ciudad, alentados por la oferta académica y cultural. Esto está relacionado a la radicación de los hostels, tiendas de diseño o moda, galerías y espacios de muestras o exposiciones de San Telmo. Esto se suma a la presencia de los anticuarios, que lograron persistir por sobre los comercios tradicionales del barrio, como zapaterías, panaderías y almacenes.

Mientras tanto en el país, el gobierno interino de Eduardo Duhalde puso fin a la ley de convertibilidad a través de la devaluación de la moneda. A esta medida se sumó la pesificación de los depósitos en dólares y la reprogramación de los depósitos a plazo fijo. Otra modalidad fue la emisión de bonos. A su vez se congelaron los saldos de las cuentas corrientes y de ahorro. Las tasas de interés eran altas. Además, los préstamos fueron convertidos a pesos a la paridad 1 a 1 y se suspendieron las ejecuciones. Se realizaron cambios en la Carta Orgánica del Banco Central que permitieron emitir moneda sin respaldo. Asimismo, para alivianar los efectos del desempleo, se estableció el pago doble de indemnización en los casos injustificados.

De esta manera, la economía experimentó una recuperación gracias a que el peso devaluado estimuló las exportaciones y la producción industrial, pero no así a las importaciones. No obstante, su mejoría se sustentaba en la restricción aparejada a la recesión, el desempleo, el no pago de la deuda, la emisión monetaria limitada, el congelamiento de los salarios en términos nominales y de las transferencias a las provincias. Los servicios prestados por el Estado eran ineficientes,

la legislación laboral no fomentaba el aumento del empleo ni que este fuera en blanco.

Por su parte, el resto de los espacios feriales de San Telmo, a cargo de ministerio de Ambiente y Espacio Público, se emplazaron desde hace aproximadamente seis años. En ese momento el país se encontraba bajo el primer mandato de Cristina Fernández, quien sucedía en la presidencia a su esposo Néstor Kirchner. Este último había dejado una economía en crecimiento sostenido, con equilibrio en el área fiscal y externa. El tipo de cambio real competitivo favoreció la producción y el empleo. Las reservas internacionales subieron, aumentó la recaudación, se duplicaron las exportaciones y se diversificó su composición. Otro punto importante fue la salida del default mediante la restructuración de la deuda y la cancelación con el Fondo Monetario Internacional. El dinero adeudado a los ahorristas luego del llamado corralito también fue devuelto durante la gestión y la política cambiaria se basó en un dólar estadounidense alto. Por otro lado se efectuaron las reestatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, la Fábrica Argentina de Aviones, Repsol YPF, los fondos jubilatorios y la moratoria previsional. Así es como el consumo interno aumentó como consecuencia del incremento del índice de empleo, la reducción de la pobreza y la indigencia, el aporte de las políticas sociales y la inclusión de los jubilados al sistema previsional estatal.

Dentro de este contexto nacional, en 2007 asume la jefatura del gobierno porteño Mauricio Macri, del partido Propuesta Republicana (PRO), quien luego fue reelecto en 2011. Durante su gestión, en el año 2008 se puso en funcionamiento la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), bajo la órbita del ministerio de Ambiente y Espacio Público. En 2011 se inicia una causa que involucra a la UCEP y al propio Mauricio Macri, por irregularidades y hechos de violencia durante desalojos. Este organismo junto a Policía Metropolitana, participaron de la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano de Villa Soldati, a fines de 2010. Dicha fuerza había sido creada en 2008, durante la primera gestión del PRO.

Aquel operativo implicaba el desalojo de aproximadamente 2000 familias que ocuparon el Parque Indoamericano y terrenos linderos. Estos incluían un predio de la Policía Federal donde eran depositados vehículos secuestrados en procedimientos y la zona de viviendas construidas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

El Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de la Nación protagonizaron un debate en torno a la responsabilidad de ejecutar el desalojo, potenciado luego de que se produjeron hechos de violencia que terminaron con la vida de tres personas. El caso aún no quedó esclarecido ya que varios serían los frentes que habrían actuado en el enfrentamiento.

Por un lado, miembros de ambas fuerzas habrían utilizado balas de plomo con armas reglamentarias e itakas. A ellos se sumaron Gendarmería y la Prefectura Naval. Por otro lado, habrían actuado los vecinos cercanos al parque, algunos armados; especuladores inmobiliarios de los barrios de emergencia; y barrabravas señalados como vinculados al gobierno porteño y la Policía Metropolitana. Sin embargo, al comienzo de la causa sólo estaban procesados como instigadores militantes políticos de distintas agrupaciones, como el Frente Darío Santillán o la Corriente Clasista y Combativa.

Además, la desocupación estuvo signada por discursos cargados de xenofobia hacia los inmigrantes de origen boliviano y paraguayo sin vivienda que se encontraban en el parque, pese a que también había residentes argentinos, lo que constituyó materia de estudio para la investigación social.

Retomando a Ernesto Laclau, Alejandro Pisera y Julián Mónaco concluyen que «una precaria formación discursiva racista comienza a constituirse, a elaborar sus regularidades, a delimitar sus objetos y sujetos, a delinear su modalidad enunciativa, configurando identidades con mayores y menores derechos, mientras que ciertas zonas significantes cristalizadas de lo social (propiedad, Estado, trabajo) salen indemnes del proceso, logrando recapturarlo dentro de su marco de límites y exclusiones» (Pisera y Mónaco, 2011:12).

En otro sentido pero referido a la apropiación del espacio público, se produjo un conflicto a principios de 2012, cuando el Gobierno de la Ciudad, a través de la UCEP, desalojó a los vendedores ubicados sobre la calle Florida, cuya actividad era considerada competencia desleal por parte de los comerciantes de locales habilitados. En este marco, se produjeron cortes parciales de las avenidas Córdoba y Corrientes sumado a hechos de violencia que volvieron a tener como protagonista a la Policía Metropolitana.

En este contexto se allanaron talleres de costura clandestinos donde se encontró mercadería ya empacada para entregar, que el Estado atribuyó a los manteros de Florida. «Esto

implica que hay una organización muy poderosa y grande que provee, genera y da mercadería y que, en muchos casos, no es una situación de mera subsistencia como se plantea», expresó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli (*La Nación*, 2011). Por otro lado, los vendedores de la calle denunciaron ser víctimas de aprietes y coimas por parte de la policía.

Así las cosas, se presenta una división de los sujetos en cuestión, entre los cuales se destacan por un lado los comerciantes de la zona junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo la amenaza de no pagar sus impuestos, y por otro los llamados manteros. A la vez, entre estos los artesanos buscaron diferenciarse de los que son revendedores. Asimismo, algunos de estos últimos se encontraban nucleados en el Movimiento Social Francisco Jofré, desde el cual peleaban la regularización de su situación mediante acciones como el corte de calles. No obstante, se produjeron diferencias internas.

Una de las propuestas del gobierno fue la reubicación de los revendedores hacia otros espacios de la ciudad, ante lo que recibió la negativa de los mismos, que querían quedarse en las zonas de mayor flujo turístico.

Finalmente, luego de varios meses que incluyeron decomiso de mercadería y represión policial, los vendedores callejeros fueron desalojados y buscaron otros espacios, entre ellos San Telmo. La Ley 4121 autorizó a 30 ferias en la Ciudad de Buenos Aires, donde está incluido el sendero de calle Defensa. No obstante, la actividad está prohibida entre el 500 y 600. Asimismo, los productos ofrecidos solo pueden ser artesanías, quedando excluida la reventa.

Por otro lado, el desalojo de las clases populares volvió a escena con el proyecto del gobierno para ampliar los carriles exclusivos para el transporte público. En 2013 se inauguró el sistema de Metrobús en la avenida 9 de Julio; la arteria que fue objeto de reiterados proyectos de remodelación. El objetivo fue normalizar el tránsito y estacionamiento de los transportes que antes se concentraban de forma irregular en las cercanías del obelisco. Al momento del trabajo de campo, este ramal se encontraba en ampliación, un proceso que requería la demolición de varias viviendas, incluidas algunas instalaciones de la Asamblea 20 de diciembre, organizadora de la feria del Pasaje Giuffra, como parte de su teatro y su escuela de psicología social. Ante esta situación,

los asambleístas formaron una comisión, realizaron cortes de calle y presentaron un recurso de amparo.

Por otra parte se relevó que, sumado a la retirada de los sectores más vulnerables, el barrio experimentó otros cambios, como la composición del turista. Los vaivenes de la economía mundo están vinculados a la presencia de visitantes jóvenes de países con un menor poder adquisitivo, y esto se tradujo en el tipo de consumo que realizan. Este contexto económico es el mismo que favoreció al capital inmobiliario, a través de cambios en la planificación urbana.

Esta podría ser una de las causas por las cuales los turistas se volcaron a los artículos que se ofrecen en las ferias de calle Defensa y no a los de los locales de anticuarios. Estos últimos culpabilizan a los feriantes por su baja en las ventas, discurso que se suma a la polémica ya existente entre el Gobierno de la Ciudad y los puesteros que no están habilitados, con el consecuente riesgo de desalojo.

La mesa de Economía del Movimiento Evita desarrolló un informe¹ para los integrantes de la cooperativa El Adoquín, una de las ferias que se encuentra hace cuatro años sobre calle Defensa, entre Carlos Calvo y Avenida Independencia.

El incremento del turismo genera un aumento en los precios de las propiedades y los alquileres, lo que se traduce en aumentos de precios de los productos. Como la composición del turismo cambia, el consumo se dirige más a bienes accesibles y no tanto a los productos tradicionalmente ofrecidos por los negocios. Estos últimos ven entonces aumentar sus costos, y disminuir sus ventas. Sin embargo, esto no está ligado a la presencia de los puesteros.

De este modo, el documento del Movimiento Evita sintetiza el estudio que realizaron para la cooperativa El Adoquín, que incluyó una estimación a partir de los arribos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery. A partir de ello también concluyeron que desde la salida de la crisis el turismo general se incrementó, sobre todo el proveniente de Chile, Brasil y Europa. Sin embargo, la tendencia del turismo receptivo se frenó con los últimos vaivenes de la economía mundial, que afectó fundamentalmente a los Europeos (Mesa de Economía del Movimiento Evita, 2013:1).

Así es como el entorno urbano es algo más que el escenario físico donde se desarrolla la vida de los individuos, siendo un

producto social fruto de la interacción simbólica entre las personas que comparten un determinado espacio, con los significados que se le han dado a través del tiempo constituyendo determinados sentidos sociales.

Trazar una línea histórica nos permite pensar la ciudad, no como un mero horizonte espacial sino como una gran red de comunicación que interpela a los actores de diversas maneras. La exclusión de algunos sectores del espacio público hace a los sentidos en torno al mismo. Por otro lado, se produce la aparición de nuevos actores y su resistencia; la participación activa de los sujetos sociales en la construcción-apropiación del espacio, sujeta a múltiples mediaciones de carácter social.

Referencias bibliográficas

APPUGLIESE, Silvia Lorena (2008). «La planificación urbana en relación con el acceso a la ciudad». *Revista Question*. 1 (20). Disponible en: <http://goo.gl/AEirm9>

PISERA, Alejandro y MÓNACO, Julián. (2011) *La ocupación del Parque Indoamericano: todos podemos ser ciudadanos. VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.*

Referencias electrónicas

«Urbanismo. Historia de dos ciudades. (Buenos Aires-París)». (1968, 27 de febrero). *Revista Primera Plana*. [en línea]. Recuperado de: <http://goo.gl/UidqIK>

«Otra vez manteros de enfrentan a inspectores». (2011, 29 de diciembre). En *La Nación* [en línea]. Recuperado de: <http://goo.gl/Ji8xuu>

Notas

1 Mesa de Economía del Movimiento Evita: «La problemática de los artesanos en San Telmo». Informe Especial N.º 21; año 2013.